



A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El GRUPO PARLAMENTARIO PLURAL, a instancia del diputado del **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**, NÉSTOR REGO CANDAMIL, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **MOCIÓN CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN URGENTE dirigida a la Ministra de Industria, Comercio y Turismo**, para que exponga las medidas que prevé el Gobierno para dar solución a la crisis industrial en Galiza.

Madrid, a 25 de junio de 2020

Néstor Rego Candamil

Diputado del BNG

Laura Borràs i Castanyer

Portavoz del Grupo Plural

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La crisis social y económica derivada de la emergencia sanitaria ha venido a agravar en Galiza a unha crisis industrial profunda que afecta especialmente, pero no de forma exclusiva, a la industria electrointensiva.

El Gobierno central ha asistido impasible en los últimos años a distintos capítulos de esta desoladora historia, y con su falta de interés ha facilitado que se agrave la crisis industrial en Galiza, que va desde Ferroatlántica en la Costa da Morte, hasta la crisis de los astilleros de Barreras y Vulcano en Vigo, pasando por la térmica de As Pontes, Isowat y la antigua factoría de Alcoa (Alu-Ibérica) en A Coruña y a la que se suma ahora el anuncio de cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao en la Mariña lucense.

La energía que consumen estas industrias es uno de los factores determinantes para la viabilidad de muchas de estas factorías. Galiza es un país productor excedentario de energía eléctrica, que envía al exterior la tercera parte de su producción. Sin embargo, esa condición de productor, a pesar de haber acarreado históricamente costes ambientales y sociales importantísimos, no repercute en beneficio de la población ni del desarrollo de nuestra economía. De hecho las gallegas y gallegos somos en el año 2020 los que pagamos la tarifa más cara del Estado español. Por eso el BNG defiende una Tarifa Eléctrica Galega que abarate el coste de la energía eléctrica para nuestras empresas y para el conjunto de la población.

Es por ello que el BNG ha propuesto en reiteradas ocasiones que, en las comunidades excedentarias, como es el caso de Galiza, se actúe sobre el peaje de transporte, con una bonificación del 100%, porque es de justicia que la electricidad sea más barata al lado de donde se produce.

En este sentido, entendemos que esta actuación convertiría en más eficaz el tan necesario Estatuto del consumidor electrointensivo, que debe ser mejorado también con la subida al 100% las bonificación de los cargos ya previstos y complementariamente elevando al máximo permitido la compensación por CO2.

El BNG ha demandado también la puesta en marcha de Planes de Transición Justa para las centrales térmicas en Galiza, resultando imprescindible y urgente la articulación de compensaciones y proyectos que palién las consecuencias negativas en el ámbito económico y social.

El último episodio en la crisis industrial gallega es el ya conocido cierre de la planta de aluminio de Alcoa en San Cibrao, para evitar la catástrofe económica y social que tendría en toda la comarca este cierre, entendemos que el Gobierno español deberá apostar por la nacionalización de la factoría, que ya en su día fue pública y que nunca debió ser privatizada, asegurando así, los puestos de trabajo y el futuro económico del principal motor económico en A Mariña. Ni el marco normativo gallego, ni el del Estado, ni el de la Unión Europea impiden la nacionalización de Alcoa, por lo tanto, esta solución solo necesita de la voluntad política de las Administraciones públicas, solución que permitiría preservar el empleo y salvar una comarca entera.

Por todo ello, **el Bloque Nacionalista Galego, adscrito al Grupo Parlamentario Plural, insta al Gobierno a:**

1. Apostar, en relación con Alcoa San Cibrao y en el caso de mantenerse la negativa de la empresa a negociar o vender, por la intervención pública para la nacionalización de la planta de aluminio de forma que se garantice la continuidad de la actividad y de los puestos de trabajo.
2. Actuar para asegurar el futuro de Alu Ibérica, incluyendo la intervención pública, si los inversores privados no garantizan la continuidad de la actividad.
3. En relación con las térmicas, avanzar en la transición ecológica y la descarbonización de la economía con justicia social, previendo inversiones y estableciendo planes de sustitución económica para las comarcas de Cerceda y As Pontes para poder concertar Convenios de Transición Justa que realmente supongan la reactivación económica y la creación de puestos de trabajo que permitan recuperar el dinamismo de estos dos Concellos, posibilitando un futuro para sus habitantes que no los aboque al paro o a la emigración.
4. Aprobar un Estatuto del Consumidor electrointensivo que realmente suponga una solución para el sector de la industria electrointensiva, es decir, que garantice un precio estable, predecible y asumible. Para ello, será necesario mejorar el borrador presentado, actuando sobre el peaje de transporte, con una bonificación del 100% y también con la subida al 100% la bonificación de los cargos ya previstos y complementariamente elevando al máximo permitido la compensación por CO2.

5. Facilitar la creación de una Tarifa Eléctrica Galega, dada la condición de país productor excedentario de energía eléctrica, que permita abaratar el coste de la electricidad tanto para las empresas como para los particulares.
6. En el caso de Navantia de la Ría de Ferrol apostar por la creación de un Complejo Industrial Integral que diversifique su actividad pero que la sustente especialmente en la construcción naval civil, levantando el veto político a abrir Navantia de la Ría de Ferrol a un sector que, con todas las dificultades por las que está pasando, tiene gran potencialidad y abre expectativas de actividad más estable y continuada que es, justamente, lo que estamos necesitando.
7. Buscar una solución estable y duradera para el astillero Barreras y recuperar la actividad en las antiguas instalaciones de Vulcano, empezando por mantener y prorrogar en su caso la concesión de dominio público imprescindible para viabilizar la actividad del astillero.
8. Impulsar, de acuerdo con la Xunta un Plan de reindustrialización de Galiza, adaptado a las exigencias del momento y de los retos de la transición ecológica, garantizado desarrollo, justicia social y bienestar.